

Financiar la educación transformadora de género como vía hacia la justicia para las mujeres y las niñas

NGO CSW
FORUM 70

EVENTO
PARALELO

Escanear para registrarse



Formato del evento paralelo: En línea

17 de marzo de 2026

8:30 a. m. EDT/2:30 p. m. SAST

Financiar una educación transformadora en materia de género: un imperativo de justicia para las mujeres y las niñas

La educación transformadora en materia de género (GTE) se está imponiendo rápidamente como una de las herramientas más poderosas para promover la justicia para las mujeres y las niñas, pero sigue adoleciendo de una grave falta de financiación y es políticamente frágil.

Los defensores se reunieron para pedir medidas más contundentes en materia de educación e igualdad de género en el evento paralelo virtual de las ONG para la 70.^a sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW70), titulado «La financiación de la educación transformadora en materia de género como vía hacia la justicia para las mujeres y las niñas». Hicieron hincapié en que, si el mundo está verdaderamente comprometido con garantizar el acceso a la justicia, también debe comprometerse a financiar una educación que transforme las normas de género, y no solo amplíe el acceso.



El evento fue organizado conjuntamente por la Campaña Mundial por la Educación (GCE), la Campaña Árabe por la Educación para Todos (ACEA), la Red Africana de Campañas por la Educación para Todos (ANCEFA), la Asociación de Asia y el Pacífico Sur para la Educación Básica y de Adultos (ASPBAE) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).

Al inaugurar la sesión, los co-moderadores Lae Santiago, responsable de promoción y participación juvenil de la ASPBAE, e Israel Quirino, asistente de programas de la CLADE, ambos miembros del Grupo de Acción Juvenil de la GCE, enmarcaron el debate en el tema de la CSW70 sobre el fortalecimiento del acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas. Destacaron la alarmante reacción contra la igualdad de género, el aumento de la violencia, incluida la violencia digital, y la reducción del espacio cívico.



La vicepresidenta de GCE y coordinadora general de CLADE, Nelsy Lizarazo, profundizó en este enfoque al exponer seis ideas clave sobre por qué la financiación de la Educación para la Igualdad de Género (GTE) es una cuestión de justicia. En primer lugar, destacó que no puede haber justicia sin justicia de género, ni justicia de género sin dismantelar las barreras de género arraigadas en los sistemas de educación pública. En segundo lugar, destacó que millones de niños y niñas siguen sin asistir a la escuela y que muchos de los que asisten no pueden aprender en entornos inclusivos y seguros, mientras que la exclusión de las mujeres adultas de las oportunidades educativas sigue siendo en gran medida invisible. En tercer lugar, subrayó que la EGT aborda directamente estas injusticias al crear espacios de aprendizaje seguros e inclusivos y permitir que las niñas, las adolescentes y todas las personas que aprenden lo hagan en condiciones equitativas. En cuarto lugar, argumentó que esto requiere hacer frente a la profunda «matriz» de relaciones de poder culturales, sociales, políticas y económicas que, a lo largo de siglos, ha normalizado la discriminación, las jerarquías y la subordinación, y remodelar los roles impuestos tanto a las niñas como a los niños, incluidas las expectativas perjudiciales que se imponen a los hombres y los niños de ser «protectores».



En quinto lugar, destacó que los propios docentes y las escuelas deben transformarse —desde los planes de estudio y los libros de texto hasta el tratamiento de la violencia de género, la salud menstrual y la seguridad en el transporte—, ya que los educadores también se forman dentro del mismo sistema desigual. Por último, destacó que todo esto depende de una financiación de la educación sostenible y suficiente que se base explícitamente en la justicia de género, con una presupuestación sensible al género y transformadora en materia de género para eliminar las barreras estructurales que afectan a las niñas, las adolescentes y los estudiantes de género diverso, y para garantizar que los recursos cambien realmente las condiciones sobre el terreno en lugar de reproducir las desigualdades existentes.

Giovanna Modé, asesora de políticas y incidencia de GCE, destacó que GTE:

- Dota a las mujeres, las niñas y los estudiantes de género diverso de conocimientos sobre sus derechos, capacidad de acción y habilidades de liderazgo para reclamar justicia en los tribunales, las comunidades y los parlamentos.
- Desafía la «matriz» de poder cultural, social, político y económico que normaliza la discriminación, la subordinación y la violencia de género.
- Exige un cambio sistémico — desde los planes de estudio y la pedagogía hasta entornos de aprendizaje seguros, la formación de docentes y los mecanismos de rendición de cuentas— y no solo «lograr que más niñas asistan a la escuela».





Voces de la región: La educación en tiempos de crisis y exclusión

Una intervención juvenil a cargo de Yara Alawad, de la Campaña Árabe por la Educación para Todos (ACEA) de Palestina, recordó a los participantes que la justicia educativa no puede separarse de la paz, la seguridad y la dignidad. Describió cómo los conflictos, los desplazamientos, las crisis económicas y la inestabilidad política en toda la región árabe están afectando el aprendizaje de millones de personas, siendo las niñas a menudo las primeras en abandonar la escuela cuando las familias se enfrentan a la inseguridad y la pobreza. En tales contextos, la educación suele ser el primer sistema en verse afectado y el último en recuperarse, y las niñas se enfrentan a múltiples barreras, como desplazamientos inseguros, normas restrictivas y un mayor riesgo de matrimonio precoz y violencia, lo que hace que la educación de las niñas en situaciones de emergencia sea a la vez urgente y difícil.



Ram Gaire, de la Campaña Nacional por la Educación (NCE) de Nepal y miembro del Consejo de la EGC, puso de manifiesto cómo las niñas marginadas —entre ellas las dalit e indígenas, las niñas con discapacidad, las madres adolescentes y aquellas que viven en la pobreza o en zonas afectadas por conflictos— siguen siendo las más rezagadas a pesar de los firmes compromisos políticos. Compartió ejemplos concretos de cambio, como un programa de aprendizaje acelerado de «puente» que volvió a matricular a niñas que habían abandonado la escuela mediante un plan de estudios condensado y capacitación en liderazgo; redes de educación inclusiva y para niñas que reúnen a niñas, jóvenes, docentes y autoridades; y mecanismos de denuncia y respuesta en las escuelas que están comenzando a hacer que los espacios de aprendizaje sean más seguros y receptivos. Es alentador que algunos gobiernos locales estén asignando ahora presupuestos específicos para sostener estas iniciativas, incluyendo becas, instalaciones de higiene menstrual y baños separados y seguros, así como indicadores sensibles al género en los planes locales.



Deuda, justicia fiscal y margen de maniobra presupuestario

Desde Senegal, Khaita Sylla, directora nacional de ActionAid Senegal y representante de la Alianza para la Educación Fiscal, puso de relieve la economía política de la financiación. Señaló que, incluso en países como Senegal, donde sobre el papel se cumplen o superan los parámetros internacionales de gasto en educación, las limitaciones estructurales —como la carga de la deuda, las normas fiscales injustas y los flujos financieros ilícitos— están mermando los recursos necesarios para transformar los sistemas. Las enormes pérdidas anuales derivadas del abuso fiscal de las multinacionales y la evasión fiscal de las grandes fortunas se suman al aumento de los costos del servicio de la deuda, mientras que las recetas de austeridad se traducen con demasiada frecuencia en menos docentes y con salarios más bajos, aulas superpobladas e inseguras, y presión para privatizar la educación.



Khaita destacó que estas decisiones nunca son neutras en materia de género y que, cuando los servicios públicos se reducen, las mujeres asumen una mayor carga de cuidados no remunerados y las niñas corren un mayor riesgo de ser retiradas de la escuela. Por lo tanto, cerrar las lagunas fiscales, introducir sistemas tributarios progresivos y sensibles al género, y buscar la justicia fiscal son esenciales para crear un espacio fiscal real para la GTE. También señaló que la emergente Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional representa una oportunidad histórica para exigir un régimen fiscal global feminista que reasigne los derechos de tributación de manera más justa al Sur Global y reconozca la justicia fiscal como una condición para la igualdad de género.



Hacer de GTE el centro de la educación

En representación de la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI), Natasha Harris-Harb, responsable de Movimientos Juveniles y Liderazgo Feminista, argumentó que recortar el trabajo en materia de igualdad de género en tiempos de crisis no solo es un error moral, sino también una mala decisión de inversión. Basándose en datos de la Red Feminista para la Educación Transformadora en materia de Género y la Iniciativa «Género en el Centro», demostró que la educación transformadora en materia de género tiene fuertes «efectos multiplicadores», como la mejora del aprendizaje, la salud y el bienestar; la reducción de las tasas de matrimonios precoces y forzados; el aumento de la participación económica; y la reducción de la violencia y los conflictos, todo lo cual conlleva importantes beneficios sociales y económicos.

Las perspectivas gubernamentales y multilaterales, incluidas las aportaciones de la Dirección Nacional de Salud Escolar y Asuntos Transversales de Mozambique y de Sally Gear, directora de prácticas para la igualdad de género y la inclusión de la Alianza Mundial para la Educación (GPE), reforzaron la necesidad de pasar de los proyectos a reformas plurianuales que abarquen todo el sistema. Esto implica proteger y ampliar los presupuestos educativos, integrar la igualdad de género y la inclusión en los planes sectoriales, incorporar a los movimientos feministas y juveniles al diálogo sobre políticas, y fortalecer los datos interseccionales y la rendición de cuentas para que las decisiones de financiamiento se basen en las realidades vividas.





Una agenda colectiva

En la sesión de clausura, Susmita Choudhury, consultora de Género e Inclusión Social de la CME, invitó a los participantes a señalar medidas concretas que sus organizaciones pueden adoptar en los próximos 24 meses. En todas las regiones y sectores, coincidieron en prioridades comunes, entre ellas: ampliar la promoción presupuestaria basada en datos empíricos que vincule la financiación con resultados de género; fortalecer la presupuestación sensible al género y transformadora en materia de género; romper los silos entre los movimientos de educación, feministas y de justicia económica; potenciar el liderazgo juvenil en la promoción de la financiación de la educación; e invertir en comunicaciones que hagan que la GTE sea visible y convincente para los responsables de la toma de decisiones y el público en general.

La sesión concluyó con una firme declaración de solidaridad con las mujeres y las niñas que viven en situaciones de guerra y ocupación, cuyos derechos a la vida, la seguridad y la educación están siendo violentamente negados. Para la CME y sus socios regionales, la 70.^a sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) fue una oportunidad para insistir en que el acceso a la justicia debe incluir el derecho a una educación pública bien financiada y transformadora en materia de género para todos.

